

Santiago, diecinueve de diciembre de dos mil veintidós.

VISTOS:

PRIMERO: Que, comparece María José Muñoz Reinoso, abogado, CI N° 13.432.722-7, en representación de la empresa SALCOBRAND S.A., persona jurídica del giro de su denominación, ambos con domicilio para estos efectos en Avenida Santa Lucía 344 oficina 61, comuna y ciudad de Santiago, e interpone reclamo judicial en contra de la resolución de multa N° 8507/20/42, en todos sus numerales, de fecha 30 de diciembre de 2020, dictada por la INSPECCIÓN COMUNAL DEL TRABAJO DE SANTIAGO, representada por doña María Leonor Arroyo Funes, con domicilio en Moneda N° 723, comuna y ciudad de Santiago, la cual multó a mi representada por la suma total de 360 UTM, lo que en pesos equivale a la fecha de envío de la multa a \$18.370.440.

Expone que, con fecha 24 de noviembre de 2020, se notificó el inicio de un procedimiento de fiscalización que conforme a la resolución que cursa multa, constatándose 6 supuestas infracciones, las que se reclaman judicialmente en este acto.

Analiza de manera separada cada una de ellas, según señala, para evidenciar los errores y defectos de los que adolecen en niveles particulares y en los acápites siguientes, se efectuarán las alegaciones generales respecto de todas ellas.

MULTA N°1: No informar a los trabajadores Sres. Víctor Cerda CI 12.632.435-9, Carlos

Zurita CI 13.679.443-4 y Moisés Alderete CI 17.838.016-8. Quienes realizan tareas de limpieza y desinfección de los riesgos que entrañan sus labores, las medidas preventivas pertinentes y los métodos de trabajo correcto, respecto de los procedimientos para la limpieza y desinfección, el correcto uso y retiro de la protección personal, la desinfección o eliminación de la protección personal utilizada. No informar a los trabajadores los riesgos que entrañan sus labores, las medidas preventivas pertinentes y los métodos de trabajo correcto, respecto a los riesgos de Covid- 19, en cuanto a vías de transmisión, signos y síntomas, acciones si presenta síntomas y medidas preventivas y de autocuidado. Tal hecho es un incumplimiento a las obligaciones legales sobre prevención de riesgos profesionales y



del derecho a saber e implica no disponer medidas que protejan eficazmente la vida, salud e higiene de los trabajadores al interior de la empresa.

Dicha multa se cursó por no informar a los trabajadores que realizan tareas de limpieza y desinfección sobre el procedimiento de limpieza y desinfección, así como el uso de la protección personal, lo que habría sido una infracción al artículo 21 del DS 40 de 1969 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en relación con el protocolo de actuación en lugares de trabajo Covid 19 y artículos 184 y 506 del Código del Trabajo.

Refiere que la empresa ha informado a cada uno de los trabajadores del local sobre los riesgos relacionados con el Covid 19, las modificaciones al reglamento interno de la empresa de conformidad a las directrices del ministerio de salud y del trabajo en atención a la pandemia, el uso de elementos de protección personal y el protocolo de limpieza e higiene del local, todo lo cual además se exhibe en el diario mural del local, cuestión que todos quienes trabajan ahí conocen y cumplen; cuestión que al parecer para la fiscalizadora actuante no fue suficiente al momento de la fiscalización, puesto que no se puede entender el por qué de esta infracción si tanto los jefes de local, como los jefes zonales y el área de prevención de riesgos de la empresa, han ido informando local por local acerca de los nuevos protocolos de seguridad ante la pandemia, los riesgos asociados y los nuevos elementos de protección personal que deben utilizarse por parte de estos. Lo mismo con la inversión efectuada por la empresa en cada local y por cada trabajador en cuanto a la compra y adquisición de mascarillas, elementos de limpieza y sanitización adecuados para enfrentar los posibles contagios, los separadores en los mostradores, la señalización del aforo, entre otros, con el único objeto de proteger a sus propios trabajadores ante la necesidad de atención de las farmacias en una época como la vivida en el 2020 y a principios de este año.

Añade, en subsidio, la propia Inspección del Trabajo levantó acta de reanudación de funciones el 24 de noviembre de 2020, de manera que a esa fecha ciertamente la infracción, al menos, se habría encontrado corregida, de forma que si el tribunal estima insuficiente las alegaciones de esta parte en torno a dejar sin efecto la infracción, al menos se deberá rebajar el monto en el máximo legal permitido o en lo que se determine al efecto.



Al respecto, la norma infringida es la contenida en el DS 40 que aprueba Reglamento sobre prevención de riesgos profesionales del Ministerio del Trabajo y Previsión social de 1969, Artículo 21º: “Los empleadores tienen la obligación de informar oportuna y convenientemente a todos sus trabajadores acerca de los riesgos que entrañan sus labores, de las medidas preventivas y de los métodos de trabajo correctos. Los riesgos son los inherentes a la actividad de cada empresa.

Especialmente deben informar a los trabajadores acerca de los elementos, productos y sustancias que deban utilizar en los procesos de producción o en su trabajo, sobre la identificación de los mismos (fórmula, sinónimos, aspecto y olor), sobre los límites de exposición permisibles de esos productos, acerca de los peligros para la salud y sobre las medidas de control y de prevención que deben adoptar para evitar tales riesgos”.

Además de ello, existe un protocolo de limpieza y sanitización en los establecimientos que ha sido adoptado por la empresa, en el que se detallan insumos, desinfectantes a utilizar, sus riesgos propios, la frecuencia de las labores de limpieza, las zonas, y distintas etapas de limpieza; donde además se detalla el uso de elementos de protección personal y el procedimiento de retiro de estos; información que además de ser dada a conocer en detalle a los trabajadores del local, está disponible en la plataforma en línea de la empresa a la que puede acceder cualquier trabajador desde cualquier dispositivo en el interior del local, de tal forma que ante una duda los colaboradores siempre se mantienen informados al respecto, constancia que ha sido omitida por el fiscalizador actuante al momento de cursar la multa.

MULTA N°2: No mantener ni proporcionar los equipos y dispositivos técnicamente necesarios para reducir a niveles mínimos los riesgos del personal de limpieza y desinfección, que puedan presentarse en el lugar de trabajo y espacios comunes, según el siguiente detalle: guantes desechables o reutilizables, que sean resistentes impermeables, manga larga (no quirúrgicos), mascarilla para evitar propagación del virus Covid- 19, Perchero desechable o reutilizable. Afectando a los trabajadores Sres. Víctor Cerda CI 12.632.435-9, Carlos Zurita CI 13.679.443-4 y Moisés Alderete CI 17.838.016-8.

Dicha multa se cursó por no mantener ni proporcionar a los trabajadores que realizan



la limpieza y desinfección de los lugares de trabajo y espacios comunes, los elementos

de protección personal y dispositivos técnicos para realizar limpieza y desinfección, lo

que atentaría contra una serie de normas.

Al respecto, señala que tal y como se acreditará, la empresa ha dado cumplimiento a cabalidad respecto de la normativa sanitaria, entregando los Elementos de Protección Personal a sus trabajadores, asimismo lo constató la propia Asociación chilena de Seguridad constatando que “Se entrega a los trabajadores(as) que realizan la limpieza y desinfección de los lugares de trabajo y espacios comunes, elementos de protección personal, conforme al Protocolo Modo Covid de Vida, tales como: Guantes desechables o reutilizables, que sean resistentes impermeables, manga larga (no quirúrgicos); Mascarilla para evitar propagación del virus COVID19. Pechera desechable o reutilizable”, documento que acompañará.

Sin perjuicio, indica que la normativa citada por la fiscalizadora no exige ni especifica dispositivos técnicos, por ejemplo, el numeral 23 de la Resolución Exenta N° 591 de 23 de julio de 2020 del Ministerio de Salud “Las medidas dispuestas en este acápite tendrán el carácter de indefinido, hasta que las condiciones epidemiológicas permitan su suspensión”. Así las cosas, aun cuando la normativa que la fiscalizadora cita, nada dice relación con el incumplimiento y no existe en la referida norma ninguna exigencia respecto al uso de guantes desechables o reutilizables, que además sean resistentes, impermeables, manga larga y no quirúrgicos, ni de pechera desechable o reutilizable, la empresa conforme al protocolo de paso a paso laboral, ha dado cumplimiento a la normativa actualmente vigente.

No entiende por qué el fiscalizador actuante ha omitido la revisión de la documentación entregada por la empresa, así como del protocolo de limpieza y sanitización de los establecimientos, otorgándoles un nulo valor o derechamente omitiendo su existencia, cuestión que le parece arbitraria e injusta.



En subsidio, la propia Inspección del Trabajo levantó acta de reanudación de funciones locales 24 de noviembre de 2020, de manera que a esa fecha ciertamente la infracción, al menos, se habría encontrado corregida, de forma que si el tribunal estima insuficiente las alegaciones de esta parte en torno a dejar sin efecto la infracción, al menos se deberá rebajar el monto en el máximo legal permitido, o a la suma que se determine al efecto.

MULTA N° 3: No mantener ni señalizar la obligación de distanciamiento de, al menos, un metro lineal, entre trabajadores en sala de ventas, para evitar el contagio de la enfermedad Covid- 19, situación que afecta a los siguientes trabajadores sres. Víctor Cerda CI 12.632.435-9, Carlos Zurita CI 13.679.443-4 y Moisés Alderete CI 17.838.016-8. Tal como consta en el acta levantada por el área de prevención de riesgos de la empresa, existe en el local fiscalizado la demarcación de distancia a piso exigida por la ley para efectos de asegurar el distanciamiento social exigido por la autoridad sanitaria, así como la señalización adecuada para estos efectos, cuestiones que han sido omitidas por el fiscalizador actuante al momento de cursar la multa.

En subsidio, la propia Inspección del Trabajo levantó acta de reanudación de funciones locales 24 de noviembre de 2020, de manera que a esa fecha ciertamente la infracción, al menos, se habría encontrado corregida, de forma que si el tribunal estima insuficiente las alegaciones de esta parte en torno a dejar sin efecto la infracción, al menos se deberá rebajar el monto en el máximo legal permitido, o a la suma que se determine al efecto.

MULTA N° 4: No evaluar las condiciones adecuadas de seguridad y salud laboral al no identificar los peligros y evaluar los riesgos que están presentes en el lugar de trabajo de la farmacia ubicada en Catedral N° 1009 local 2, respecto de los riesgos asociados al contagio por Covid 19, ni consideró en esta evaluación los riesgos derivados de la interacción entre trabajadores(as), contratistas y clientes.

Al respecto, la empresa efectuó una evaluación de riesgos, la que además fue remitida a la fiscalizadora actuante, en dicha matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos COVID 19, Puntos De Venta Salcobrand elaborada para el local 203, contiene el detalle de los riesgos, por ejemplo, respecto de la atención, la interacción con clientes, la permanencia



en el local, el uso de la oficina, el uso del comer, baños, reposición de productos, eliminación de residuos, trabajadores con síntomas.

De esta manera, la empresa, contrario a lo que concluyó la fiscalizadora, informó a los trabajadores sobre los riesgos de sus labores, lo hizo mediante la difusión de la matriz de riesgos, de un protocolo y de la Obligación de informar, que se encuentra actualizada y es conocida por los trabajadores del local, que contiene el detalle de las medidas preventivas y que además informa sobre todos los instructivos y procedimientos que se encuentran en la plataforma Comunidad ESB- Banner COVID 19, pues la empresa sumado a lo anterior, ha utilizado sus plataformas digitales respecto de las cuales se puede acceder desde cualquier dispositivo para reforzar la información de manera constante, con el objeto de proteger la salud y vida de sus colaboradores.

Sin embargo, a pesar de lo anterior, y que durante la fiscalización se exhibieron dichos documentos, de igual forma, y en un evidente error de hecho, la fiscalizadora decidió omitir dicha circunstancia y estimar que los riesgos no habían sido evaluados, lo que es contrario a lo que en los hechos se le exhibió, y que no tiene otra explicación, que es que se haya omitido el análisis de dichos documentos. Los que se adjuntan nuevamente.

De esta forma esta infracción se funda en un error de hecho de la fiscalizadora, pues no queda más que concluir que para arribar a la infracción, se omitió el análisis de los documentos, de manera que o se ignoraron o se tuvo un concepto equivocado sobre los mismos, configurando de esta forma el error.

En subsidio, la propia Inspección del Trabajo levantó acta de reanudación de funciones del local el 24 de noviembre de 2020, de manera que a esa fecha ciertamente la infracción, al menos, se habría encontrado corregida, de forma que si el tribunal estima insuficiente las alegaciones de esta parte en torno a dejar sin efecto la infracción, al menos se deberá rebajar el monto en el máximo legal permitido, o a la suma que se determine al efecto.

MULTA N° 5: No cumplir con las instrucciones y medidas preventivas para la limpieza y desinfección del lugar de trabajo y espacios comunes, consistentes en servicios higiénicos,



trastienda y oficina administrativa, ubicada en Catedral N° 1009, local 2, comuna de Santiago.

Al respecto, además de que la empresa ha indicado y vigilado el cumplimiento de las instrucciones contenidas en el protocolo elaborado al efecto, sobre las tareas de limpieza y desinfección, el error de hecho en este caso queda en evidencia pues la fiscalizadora no explica en parte alguna en qué momento o por qué personas no se estarían cumpliendo las instrucciones y medidas preventivas de limpieza y desinfección del lugar de trabajo y espacios comunes, por lo que la multa así cursada carece de fundamento y nos impide una debida defensa, ya que teniendo toda la documentación al efecto, ésta fue omitida de revisar, lo que nos parece arbitrario de parte de la fiscalizadora actuante.

Por otro lado, y en subsidio, la propia Inspección del Trabajo levantó acta de reanudación de funciones del local el 24 de noviembre de 2020, de manera que a esa fecha ciertamente la infracción, al menos, se habría encontrado corregida, de forma que si el tribunal estima insuficiente las alegaciones de esta parte en torno a dejar sin efecto la infracción, al menos se deberá rebajar el monto en el máximo legal permitido, o a la suma que se determine al efecto.

MULTA N° 6: No actualizar el plan de emergencia y evacuación del lugar de trabajo considerando distribución de los puestos de trabajo, el aforo reducido, vías de acceso, vías de circulación, zonas de seguridad y evitar aglomeraciones, medidas preventivas de Covid 19, no mantener condiciones de la ruta de entrada y salida, condiciones de vías de escape en buen estado y libre de obstrucciones, para evitar el contagio de la enfermedad Covid 19, situación que afecta a los siguientes trabajadores: Víctor Cerda

CI 12.632.435-9, Carlos Zurita CI 13.679.443-4 y Moisés Alderete CI 17.838.016-8.

Las estrategias que han debido implementar las empresas para hacer frente a la pandemia de COVID-19 en el espacio laboral, han debido planificarse, ejecutarse y controlarse de tal forma, que la empresa ha elaborado un procedimiento general COVID-19, cuya versión vigente a la hora de la fiscalización era la N°2, de fecha 1 de septiembre de 2020. Dicho protocolo se encuentra en línea con la resolución sanitaria



que precisamente mandata la limpieza y desinfección de espacios, contenidos en el Ord. B1 N°2770 del 15 de Julio de 2020 y con las medidas preventivas generales a realizar en los lugares de trabajo, elaborado por la autoridad sanitaria.

Este procedimiento general ha sido recibido por los trabajadores, quienes han suscrito el documento dando cuenta de esta circunstancia, el procedimiento informa sobre diversos riesgos, siendo pertinente en este caso resaltar el capítulo referente al Proceso De Limpieza y Sanitización En Los Establecimientos, en el que se detallan los insumos, los desinfectantes a utilizar, los riesgos de ellos, la frecuencia de las labores, las zonas, las etapas, los riesgos de dicha labor. En dicho proceso, se detalla el uso de Elementos de Protección personal y el procedimiento de retiro de estos, la eliminación de dichos elementos.

Luego, y sobre la evaluación e información respecto a los riesgos de Covid-19, en cuanto a medidas preventivas pertinentes, vías de transmisión, signos y síntomas, acciones si presenta síntomas y medidas preventivas y de autocuidado, el mismo procedimiento anterior detalla precisamente lo contenido en el protocolo sobre medidas preventivas elaborado por la autoridad sanitaria, especificando, además, aquello propio de la actividad desarrollada por la demandada. Y no solo eso, además, la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos COVID 19, Puntos De Venta Salcobrand, elaborada para el local 009, contiene el detalle de los riesgos, por ejemplo, respecto de la atención, la interacción con clientes, la permanencia en el local, el uso de la oficina, el uso del comer, baños, reposición de productos, eliminación de residuos, trabajadores con síntomas.

De esta manera, la empresa, contrario a lo que concluyó la fiscalizadora, informó a los trabajadores sobre los riesgos de sus labores, lo hizo mediante la difusión de la matriz de riesgos, de un protocolo y de la Obligación de informar, que se encuentra actualizada y es conocida por los trabajadores del local, que contiene el detalle de las medidas preventivas y que además informa sobre todos los instructivos y procedimientos que se encuentran en la plataforma Comunidad ESB- Banner COVID 19, pues la empresa sumado a lo anterior, ha utilizado sus plataformas digitales respecto de las cuales se puede acceder desde cualquier



dispositivo para reforzar la información de manera constante, con el objeto de proteger la salud y vida de sus colaboradores.

De manera que no resulta entendible, que, habiendo conocido de la Obligación de informar, firmada y publicada, la fiscalizada actuante haya cursado la infracción, conociendo además la existencia de una matriz de riesgo y un procedimiento COVID- 19 y que es específica para el local en comento.

Sumado a lo anterior, considerando que la fiscalización se efectuó el mismo día en que se cursó la multa, ni siquiera se requirió a esta parte de nuevos antecedentes, estando facultada para ello, y teniendo las actuaciones administrativas el objetivo es conocer y comprobar hechos que permitan verificar el cumplimiento de la legislación laboral, la revisión de documentos es fundamental, debiendo el inspector tener presente que cuando determine realizar la revisión de documentos en el lugar de trabajo durante la visita de fiscalización y, por ejemplo, ésta no se encuentra disponible, se otorgará un tiempo para reunirla y exhibirla, en caso de no ser exhibida y ser necesaria, deberá ser requerida, lo que en este caso no ocurrió. Sobre todo considerando que la infracciones que se reclaman, dicen relación con informar y evaluar riesgos Covid-19, lo que necesariamente requeriría de revisión de antecedentes documentales.

Por otro lado, y en subsidio, la propia Inspección del Trabajo levantó acta de reanudación de funciones del local el 24 de noviembre de 2020, de manera que a esa fecha ciertamente la infracción, al menos, se habría encontrado corregida, de forma que si el tribunal estima insuficiente las alegaciones de esta parte en torno a dejar sin efecto la infracción, al menos se deberá rebajar el monto en el máximo legal permitido, o a la suma que se determine al efecto.

Sostiene que estos errores de hecho en que ha incurrido la señora fiscalizadora en todas las multas antes indicadas es un hecho vulneratorio de las normas contenidas en la ley N° 19880, en sus artículos 41 inciso 4°, puesto que no se señalan los documentos, los hechos apreciados por la señora fiscalizadora que la llevaron a arribar a dicha conclusión y bajo qué hechos, ¿cómo arriba a la conclusión que esto es así en la realidad? ¿Cómo califica que



la empresa no informó ni evaluó riesgos COVID? ¿Qué argumentos tiene para prescindir de la revisión de la matriz de riesgos, el derecho a saber y los protocolos firmados por los trabajadores?

Estima se encuentra en la total indefensión, toda vez que no sabe ante qué debemos defenderse, todo lo cual contraviene el artículo 41 inciso 4° de la ley N° 19.880 que cita.

Y esta congruencia entre los hechos descritos como vulneratorios, producen la total indefensión a su respecto, al no tener claridad ante la infracción que se le está cursando, ¿no vio los documentos o le parecieron insuficientes?, lo que es determinante, pues no sabe cómo podría reconsiderar una multa sin no sabe si la fiscalizadora no revisó documentos, o tiene reparos o estableció una obligación legal nueva en la que la evaluación e información de riesgos debe estar en algún documento que esta parte no tiene, de manera que únicamente debe recurrir al Tribunal con el objeto de que enmiende esta resolución, mediante un procedimiento justo.

Alega la ausencia de criterio de gravedad para determinar el monto de la multa, citando el artículo 506 del Código del Trabajo, que señala que en el caso de las grandes empresas como es Salcobrand S.A. respecto de sanciones no tipificadas, la multa ascenderá “de 3 a 60 unidades tributarias mensuales”, según la gravedad de la infracción; lo que universalmente se ha traducido por parte de Inspección del Trabajo en aplicar 60 UTM siempre que se de la oportunidad, y siempre que el tipificador establezca ese rango.

En este caso, la Inspección del Trabajo aplicó una multa de 60 UTM en cada caso, aplicándose el máximo establecido por el tipificador de la Inspección del Trabajo, el que, por cierto, no tiene rango legal, y como tal no tiene mayor validez que la que se otorga la propia Inspección, la que no tiene facultad para determinar en forma arbitraria los montos de la multa. En este caso, no se entiende exactamente aquí cual es el criterio de gravedad utilizado, el cual es absolutamente azaroso y arbitrario en el caso en cuestión, aplicando el máximo posible determinado antes de siquiera constatar la infracción.

En subsidio, de las alegaciones principales y que a juicio de esta parte debieran concluir dando lugar al reclamo dejando sin efecto las multas, como se ha dicho, la empresa cuenta



con un Protocolo COVID, con una Matriz de riesgos COVID adecuada para el local en cuestión, con la obligación de informar riesgos COVID suscrita por sus trabajadores, y además, con una plataforma digital que contiene los procedimientos y protocolos, de manera que a lo menos se debiera concluir que la empresa ha informado y evaluado los riesgos, y a la fecha las infracciones se encuentran corregidas.

Estima que todas las multas cursadas han sido con un evidente error de hecho, una errónea apreciación de parte de la fiscalizadora actuante que vicia el acto jurídico en el cual constan, lo que además de traer indefensión a esta parte, le produce un perjuicio que solo es reparable con que se dejen sin efectos las citadas multas o en su defecto, sean rebajadas en el máximo posible o en el monto que el Tribunal determine.

Solicita acoger el reclamo, y en consecuencia, la multa sea dejada sin efecto en su totalidad, o sea rebajada en el máximo legal de acuerdo a lo que se estime pertinente, con costas.

SEGUNDO: Que contesta la demandada, solicitando el rechazo en todas sus partes.

Indica que la actora ha impugnado por esta vía la Resolución de Multa N°8507/20/42 dictada por la Inspección Provincial del Trabajo de Santiago, y que le fueran cursadas por:

1. No informar a los trabajadores Sres. Víctor Cerda C.I. 12.632.435-9, Carlos Zurita C.I. 13.679.443-4 y Moisés Alderete C.I. 17.838.016-8, que realizan tareas de limpieza y desinfección de los riesgos que entrañan sus labores, las medidas preventivas pertinentes y los métodos de trabajo correcto, respecto de los procedimientos para la limpieza y desinfección, el correcto uso y retiro de la protección personal, la desinfección o eliminación de la protección personal utilizada. No informar a los trabajadores los riesgos que entrañan sus labores, las medidas preventivas pertinentes y los métodos de trabajo correcto, respecto a los riesgos de covid-19, en cuanto a vías de transmisión, signos y síntomas, acciones si presenta síntomas y medidas preventivas y de autocuidado. Tal hecho es un incumplimiento a las obligaciones legales sobre prevención de riesgos profesionales y del derecho a saber e implica no disponer medidas que protejan eficazmente la vida, salud e higiene de los trabajadores al interior de la empresa.



2. No mantener ni proporcionar los equipos y dispositivos técnicamente necesarios para reducir a niveles mínimos los riesgos del personal de limpieza y desinfección, que puedan presentarse en el lugar de trabajo y espacios comunes, según el siguiente detalle: guantes desechables o reutilizables, que sean resistentes impermeables, manga larga (no quirúrgicos), mascarilla para evitar propagación del virus covid-19, pechera desechable o reutilizable, afectando a los trabajadores Sres. Víctor Cerda C.I. 12.632.435-9, Carlos Zurita C.I. 13.679.443-4 y Moisés Alderete C.I. 17.838.016-8.

3. No mantener, ni señalar la obligación de distanciamiento de, al menos, un metro lineal entre trabajadores en sala de ventas, para evitar el contagio de la enfermedad covid-19, situación que afecta a los siguientes trabajadores Sres. Víctor Cerda C.I. 12.632.435-9, Carlos Zurita C.I. 13.679.443-4 y Moisés Alderete C.I. 17.838.016-8.

4. No evaluar las condiciones adecuadas de seguridad y salud laboral al no identificar los peligros y evaluar los riesgos que están presentes en el lugar de trabajo de la farmacia ubicada en Catedral N°1009 local 2, respecto de los riesgos asociados al contagio por covid-19, ni consideró en esta evaluación los riesgos derivados de la interacción entre trabajadores(as) propios, contratistas y clientes.

5. No cumplir con las instrucciones y medidas preventivas para la limpieza y desinfección del lugar de trabajo y espacios comunes, consistentes en servicios higiénicos, trastienda y oficina administrativa, ubicado en Catedral N°1009, local 2. comuna de Santiago.

6. No actualizar el plan de emergencia y evacuación del lugar de trabajo considerando distribución de los puestos de trabajo, el aforo reducido, vías de acceso, vías de circulación, zonas de seguridad y evitar aglomeraciones, medidas preventivas de covid-19 frente a otras emergencias, con el fin de evitar contagio por covid-19. no mantener condiciones de la ruta de entrada y salida, condiciones de vías de escape en buen estado y libre de obstrucciones, para evitar el contagio de la enfermedad covid-19. Situación que afecta a los siguientes trabajadores: Victor Cerda C.I. 12.632.435-9, Carlos Zurita C.I. 13.679.443-4 y Moisés Alderete C.I. 17.838.016-8.

Hace presente que los hechos que configuran las infracciones sancionadas fueron constatadas por la fiscalizadora de este Servicio doña Claudia Fernández Rojas, en el cumplimiento de sus funciones, los cuales se consignaron en la resolución de Multa y en el informe de fiscalización respectivo, los cuales gozan de presunción legal de veracidad establecida en el art. 23 de D.F.L. N°2 de 1967, Ley Orgánica de este Servicio, que opera para todos los efectos legales, incluso para la prueba judicial, lo que en concordancia con el art. 1698 del Código Civil, determina que la carga de la prueba corresponderá a la reclamante, quien deberá probar que su actuar se ha ajustado a la normativa laboral vigente.

Ahora bien, haciéndose cargo de las alegaciones relativas a la multa N°1, la reclamante pretende que no habría infringido la norma porque exhibe información en el diario mural de la empresa, en este sentido cabe tener presente que evidentemente tal publicación no da cuenta en caso alguno del cumplimiento de la obligación que impone al empleador el artículo 21 del Decreto Supremo 40, que expresamente señala "Los empleadores tienen la obligación de informar oportuna y convenientemente a todos sus trabajadores acerca de los riesgos que entrañan sus labores, de las medidas preventivas y de los métodos de trabajo correctos." Evidentemente la mera publicación en un diario mural en ningún caso asegura el conocimiento de los trabajadores de lo ahí exhibido, lo cual ciertamente no alcanza al estándar exigido por la norma por cuanto el empleador debe de informar a todos los trabajadores, y claramente también debe poder acreditar el cumplimiento de tal obligación, por lo cual malamente puede estimarse cumplida la obligación dado que la reclamante no puede acreditar que todos los trabajadores hayan leído todo el diario mural, así como tampoco que este haya tenido oportunamente todos los ítems mencionados en la sanción.

Respecto a lo señalado por la reclamante en cuanto a que se habría levantado la suspensión de funcionamiento del local por lo que debe entenderse que corrigió y por ende rebajarse la multa cabe tener presente que la suspensión no fue decretada por esta infracción, por lo cual resulta totalmente irrelevante a este respecto.

Respecto a la multa 2 la reclamante se limita a señalar que la norma no exige elementos determinados, para lo cual refiere citar el numeral 23 de la Resolución exenta 591. A este respecto en primer término cabe tener presente que la multa reclamada hace referencia al



numeral 32 y no al 23, y que ninguno de los dos señala lo citado por la reclamante. El numeral 32 de la Resolución Exenta 591 del Ministerio de Salud señala: 32. “Se entenderá por limpieza y desinfección lo indicado en el Protocolo de Limpieza y Desinfección, establecido en virtud del oficio ordinario B1 N°2.770, del 15 de julio de 2020, del Ministerio de Salud, que actualiza el "Protocolo de Limpieza y Desinfección de Ambientes Covid-19", o aquel que lo reemplace.”, por su parte el referido "Protocolo de Limpieza y Desinfección de Ambientes Covid-19" señala: “Se deben considerar el uso de los siguientes Elementos de Protección Personal (EPP) cuando se realicen los trabajos de limpieza y desinfección en espacios de uso público y lugares de trabajo (excluidos los establecimientos de atención de salud) [13]: - Pechera desechable o reutilizable; - Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables: resistentes, impermeables y de manga larga (no quirúrgicos). Para el adecuado retiro de los EPP, se debe realizar evitando tocar con las manos desnudas la cara externa (contaminada) de guantes y pechera, y considerando la siguiente secuencia de retiro [10]: - Retirar pechera y guantes simultáneamente; - Realizar higiene de manos. En el caso de trabajadores que estén bajo la cobertura de la Ley 16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, del Ministerio del Trabajo, el empleador será el responsable de velar por la vida y seguridad de los trabajadores, debiendo entre otras cosas, capacitar y de entregar los elementos de protección personal a los trabajadores que realicen las labores de limpieza y desinfección anteriormente descritos.”

Advierte que la norma hace referencia directa a que los trabajadores para realizar las labores de limpieza y desinfección del lugar de trabajo para protección contra el COVID-19 deben recibir de su empleador los elementos de protección personal (EPP) referidos en la sanción, siendo por su parte la mascarilla un EPP básico para cualquier trabajador, se dedique o no al aseo del lugar de trabajo.

Estima, resulta irrelevante lo alegado por la reclamante respecto a la revisión del protocolo de limpieza, puesto que lo sancionado no dice relación con dicho protocolo si no con la entrega de EPP.

Tampoco resulta relevante lo señalado por la reclamante en cuanto a la suspensión de funciones, por cuanto cualquier corrección posterior no tiene injerencia en la multa ya

cursada, no pudiendo acceder a una rebaja en este procedimiento ya que una rebaja por cumplimiento posterior solo corresponde al procedimiento de Reconsideración Administrativa de Multa, la cual es facultad privativa del Director del Trabajo de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 511 del Código del Trabajo.

En relación a la Multa 3 la reclamante se limita a señalar que su propio departamento de prevención de riesgos señala que si cumplen la norma, cuestión que ciertamente no alcanza para desvirtuar lo constatado por la fiscalizadora actuante, que como ya se ha señalado cuenta con presunción legal de veracidad.

Tampoco resulta relevante lo señalado por la reclamante en cuanto a la suspensión de funciones, por cuanto cualquier corrección posterior no tiene injerencia en la multa ya cursada, no pudiendo acceder a una rebaja en este procedimiento ya que una rebaja por cumplimiento posterior solo corresponde al procedimiento de Reconsideración Administrativa de Multa, la cual es facultad privativa del Director del Trabajo de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 511 del Código del Trabajo.

En relación a la multa 4, señala que contrario a lo señalado por la reclamante a la fiscalizadora solo se le presentó una matriz de riesgos tipo para todos los locales de Salcobrand, pero que no resulta aplicable al local fiscalizado, lo cual determina que en realidad no se han evaluado los riesgos respecto de él. Por ejemplo, dicha matriz se refiere al uso de vestidores, en circunstancias que el lugar fiscalizado no cuenta con uno, también refiere que el control de acceso al local lo efectuara el guardia de portería del local, pero el local fiscalizado no posee guardia. De la misma forma la matriz, al ser tipo, no señala el aforo máximo permitido para el local, ni el número de trabajadores máximos por turno. Además de no contener la evaluación de riesgos derivados de la interacción entre trabajadores propios, contratistas y clientes, ni los riesgos asociados a las tareas de limpieza. De esta forma resulta claro que no se ha cumplido con la obligación de evaluar los riesgos del lugar de trabajo fiscalizado.

Respecto a lo señalado por la reclamante en cuanto a que se habría levantado la suspensión de funcionamiento del local por lo que debe entenderse que corrigió y por ende rebajarse la



multa cabe tener presente que la suspensión no fue decretada por esta infracción, por lo cual resulta totalmente irrelevante a este respecto.

En relación a la multa 5 la reclamante se limita a señalar que habría un error de hecho porque la fiscalizadora no explica por qué las personas no estarían cumpliendo las instrucciones, cuestión a todas luces absurda porque la fiscalizadora no puede constatar la motivación o la razón del incumplimiento. Lo cierto es que, tal como se señala en el acta de suspensión, la fiscalizadora pudo constatar que no se efectuaba aseo diario de los baños y del área de trabajadores, sino que, solamente se hacía dicho aseo respecto del área de atención de público, cuestión que no es refutada por la contraria.

Reitera que tampoco resulta relevante lo señalado por la reclamante en cuanto a la suspensión de funciones, por cuanto cualquier corrección posterior no tiene injerencia en la multa ya cursada, no pudiendo acceder a una rebaja en este procedimiento ya que una rebaja por cumplimiento posterior solo corresponde al procedimiento de Reconsideración Administrativa de Multa, la cual es facultad privativa del Director del Trabajo de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 511 del Código del Trabajo.

En relación a la multa 6, hace presente que la reclamante no efectúa ninguna alegación relevante para impugnar la multa, por cuanto solo hace referencia a que cuenta con protocolos de limpieza y desinfección, en circunstancia que la multa fue cursada por no actualizar el plan de emergencia y por no mantener en buenas condiciones las vías

de escape, circunstancia a la que no se refiere en punto alguno, por lo cual malamente puede entenderse planteada una controversia a este respecto.

Posteriormente la reclamante señala “considerando que la fiscalización se efectuó el mismo día en que se cursó la multa, ni siquiera se requirió a esta parte de nuevos antecedentes” (sic) lo cual si bien no tiene injerencia en lo sancionado porque la documentación laboral debe estar en el lugar de trabajo fiscalizado, tampoco dice relación con la realidad, porque consta en el Formulario FI-4 de fecha 24 de noviembre de 2020 que la reclamante fue requerida de documentación por escrito otorgándosele un plazo para remitirla a la



fiscalizadora actuante, vale decir precisamente lo que la reclamante señala que no habría ocurrido.

Además, y respecto de las alegaciones relativas al levantamiento de la suspensión de faenas, lo cierto es que malamente podemos entender que se refiera a la multa efectivamente cursada, dado que las alegaciones de la reclamante no han tenido relación con ella, pero de cualquier forma como ya se ha señalado no resulta relevante por cuanto cualquier corrección posterior no tiene injerencia en la multa ya cursada, no pudiendo acceder a una rebaja en este procedimiento ya que una rebaja por cumplimiento posterior únicamente corresponde al procedimiento de Reconsideración Administrativa de Multa, la cual es facultad privativa del Director del

Trabajo de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 511 del Código del Trabajo.

En relación con las alegaciones relativas a la supuesta falta de fundamentación esta parte estima que tal alegación no puede sino ser rechazada, por cuanto de la lectura de la resolución reclamada en esta se observa con claridad su fundamentación tanto fáctica como legal, por lo que en caso alguno puede estimarse que esta es infundada o arbitraria, si no que tal como se ha señalado ha sido el resultado de los hechos efectivamente constatados por la fiscalizadora y que en algunos casos ni siquiera han sido refutados por la contraria.

En relación a la supuesta ausencia de criterios para determinar la gravedad de la multa cabe considerar que la gravedad de las infracciones se encuentra establecida previamente por este Servicio, en el uso de sus facultades legales, mediante el Tipificador de Hechos Infraccionales y Pauta Para Aplicar Multas Administrativas, que se encuentra disponible en la sección Gobierno Transparente de la página web de este Servicio (http://www.dt.gob.cl/1601/articles108710_recurso_1.pdf) no siendo procedente que el fiscalizador en una multa en particular deba emitir un juicio respecto a la gravedad de una infracción. Errónea resulta la consideración efectuada por la reclamante en cuanto a que el tipificador “no tiene mayor validez que la que se otorga la propia Inspección” (sic) por cuanto esto no es una mera directiva interna, si no que es el ejercicio de la facultad legal establecida en la letra 5 letra b del DFL 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Seguridad



Social, puesto que el Tipificador fija el sentido y alcance del artículo 506 del Código del Trabajo en cuanto a que este refiere que las multas se deben cursar de acuerdo a la gravedad de la infracción, pero sin determinarla específicamente, por lo cual claramente estamos frente a una materia en la que se podía y debía ejercer la facultad ya referida. Por lo demás, y sin perjuicio de que a juicio de esta parte no corresponde discutir aquí los criterios aplicados en el tipificador de hechos infraccionales, lo cierto es que parece a lo menos irresponsable que en atención al tenor de las sanciones, todas ellas relacionadas con faltas relativas a la higiene y seguridad de los trabajadores en relación a una enfermedad pandémica esta pretenda que sus faltas no revisten la mayor gravedad.

Finalmente, respecto de la supuesta corrección posterior de las infracciones cabe tener presente que, como ya se ha señalado, dicha alegación resulta del todo impropia en este procedimiento, por cuanto de acuerdo a lo establecido en el artículo 511 del Código del Trabajo dicho supuesto solo puede ser conocido por la Dirección del Trabajo en el marco de una solicitud de reconsideración administrativa de multa, por lo cual esta parte estima que debe ser necesariamente rechazada, sin perjuicio de que adicionalmente la reclamante se limita a alegaciones genéricas en este sentido, sin siquiera hacer referencia a la totalidad de las multas cursadas.

Así las cosas, y encontrándose dictada la Resolución reclamada conforme a derecho, es que esta parte estima que no deben ser modificadas de manera alguna.

Solicita rechazar el reclamo en todas sus partes, con expresa condena en costas.

TERCERO: Que, llamadas las partes a conciliación, no se produce.

CUARTO: Que, se fijaron como hechos no controvertidos: 1. Que a la empresa reclamante Salcobrand S.A. se le cursó resolución multa 8507/20/42, en el cual se le constataron 6 infracciones por un total de 360 UTM, de fecha 30 de diciembre de 2020.

QUINTO: Que, se establecieron como hechos controvertidos: 1. Efectividad de la concurrencia de hechos constatados por la fiscalizadora actuante al cursar las multas en sus 6 numerales. 2. Si la multa cursada a cumplido con los presupuestos establecidos en la Ley



19480 en cuanto a su fundamentación. 3. Procedencia o no de la rebaja de multa por cumplimiento posterior.

SEXTO: Que, en audiencia de juicio, las partes incorporaron los siguientes medios de prueba:

-Parte Demandante:

Documental:

1. Resolución de multa 8507/20/42, de fecha 30 de diciembre del año 2020.
2. Acta de notificación de requerimiento de documentación y citación de fecha 24 de noviembre del año 2020; y acta de constatación de infracciones de suspensión de labores /cese de servicios; y notificación de inicio de fiscalización.
3. Carta solicitando reapertura de local de Salcobrand en calle Catedral 1009 local 2, Comuna de Santiago Centro; con recepción por Dirección del Trabajo.
4. Acta de reanudación de labores / mantención de suspensión de fecha 5 de enero del año 2021.
5. Toma de conocimiento colaboradores Salcobrand para los siguientes documentos:

Matriz Riesgo Local 009;

Procedimiento general Covid-19

Procedimiento actuación Covid -19

Medidas preventivas en pandemia

Instructivo de limpieza de áreas y artículos de uso diario durante la operación en Salcobrand S.A.

Resolución que dispone uso obligatorio de mascarillas



6. Procedimiento General COVID-19 para Salcobrand S.A.
7. Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos COVID-19 (Miper), para Catedral 1009, Local 2.
8. Plan de Emergencia y Evacuación, Catedral 009.
9. Recepción de Elementos de Protección Personal.
10. Informe Local SB 09 Catedral sobre mantención equipos.
11. Informe Técnico ACHS sobre Calidad del Aire.
12. Reglamento Interno de Higiene y Seguridad.
13. Anexo 20 de noviembre del año 2020 con incorporación de disposiciones a Reglamento Interno.
- 14.- Recepción de Anexo Reglamento Interno de Higiene y Seguridad por Inspección Provincial del Trabajo de Maipo; y por SEREMI de Región Metropolitana.
- 15.- Set de 4 imágenes de local fiscalizado.
- 16.- Instructivo de Limpieza de Áreas y Artículos de Uso Diario durante la operación de Salcobrand S.A.

Testimonial:

1. Guillermo Fortini Jara; CI 12.263.806-5;
2. Matías Carvallo Cárdenas; CI: 18.879.776-8

-Parte Demandada:

Documental:

1. Resolución de Multa 8507/20/42
2. Caratula de Informe de Fiscalización y anexo informe de exposición.



3. Notificación de inicio de procedimiento de fiscalización
4. Acta de notificación de requerimiento de documentación y citación
5. Acta de constatación de infracciones y notificación de suspensión de labores.
6. Protocolo de limpieza y desinfección de ambientes - COVID-19
7. Dictamen 024731N19 de 12 de septiembre de 2019 de Contraloría General de la Republica.

SEPTIMO: Que, las partes en autos se encuentran contestes en el contenido de la multa, y los hechos que en ella se señalan y que fueron considerados en la aplicación de la multa, por lo que procede analizar los fundamentos del reclamo que plantea la actora.

OCTAVO: Que, en relación al fundamento del reclamo que resulta común para las multas cursadas, en cuanto a que la demandada procedió a levantar acta de reanudación de funciones, según consta en el documento, con fecha 5 de enero de 2021, lo que a juicio de la reclamante permite establecer que a esa fecha las infracciones, se habrían encontrado corregidas, preciso es considerar que nuestro ordenamiento contempla dos acciones para reclamar de las multas cursadas por el ente administrativo. La primera, que es la reclamación directa de la multa cuando es posible rebatir los hechos y fundamentos de la misma, que se rige por el artículo 503 del Código del trabajo, y, la otra acción, aquella contemplada en el artículo 512 del Código del Trabajo, que permite cuestionar la decisión de la Inspección del trabajo, conforme a las hipótesis del 511 del cuerpo legal citado, cuando existe error de hecho o corrección de la infracción. De modo que si la reclamante pretende argumentar que cumplió con posterioridad las normas infringidas, debió utilizar esta última para obtener la rebaja de la multa, lo que no hizo y habiéndose interpuesto -en tal sentido- erróneamente la acción, estos fundamentos resultan improcedentes en el caso que se revisa, por lo que no pueden ser acogidos.

NOVENO: Que, aun cuándo pudiese revisarse por esta vía el cumplimiento posterior de las obligaciones que se dicen transgredidas en la multa reclamada, resulta trascendente señalar, que según se lee en el acta de constatación de infracciones, suspensión y cese de



servicios, dicha decisión se decide por “Trabajadores no cuentan con implementos de seguridad para realizar las sanitizaciones, no se realiza sanitización en baños y áreas de trabajo mesón, pasillos obstruidos con materiales espacios reducidos”, el documento también deja constancia que las infracciones constatadas afectan a todos los trabajadores que prestan servicios en el lugar. De este modo, es posible concluir que la suspensión no dice relación con los hechos de la multa, de modo que la reanudación de funciones no significa ni da cuenta del cumplimiento posterior de la normativa infringida y sancionada por la multa reclamada.

DECIMO: Que, en cuanto a los argumentos que dicen relación con falencias en el procedimiento y que no se le dio la posibilidad de acompañar documentación, del documento mencionado precedentemente consta además que se solicitó a la reclamante con fecha 24 de noviembre de 2020, aportar una serie de documentos, a la citación efectuada para el día 26 de noviembre de 2020 ante el fiscalizador, y teniendo en cuenta, además, que la multa fue cursada con fecha 30 de diciembre de 2020, el argumento referido, resulta del todo desvirtuado.

UNDECIMO: Que, la reclamante aduce que algunas de las multas cursadas no resultan suficientemente descritas en los hechos, o que tampoco resulta efectivo, pues de la lectura de cada una de ellas se advierte una adecuada descripción y normativa transgredida, lo que en caso alguno deja en indefensión a la reclamante, y, además, las normas aparecen correctamente mencionadas, advirtiendo, de contrario, un error en la mención efectuada por el reclamante a la Resolución 591 del Ministerio de Salud, que señala claramente cuáles son los elementos de protección que deben ser entregados a los trabajadores.

DUODECIMO: Que, la reclamante señala que ha dado cumplimiento a la normativa infringida, y que existiría error de hecho en la resolución reclamada, lo que resulta desvirtuado con la prueba de la propia reclamante. Los documentos aportados por la actora, tanto matriz de riesgos, plan de emergencia, e instructivo de limpieza de áreas y artículos de uso diario, contemplan un espacio para registro –que la demandante erróneamente denomina “colaboradores”- para que los trabajadores suscriban haber tomado conocimiento, e incluso hay espacio para el nombre del monitor, de modo que quien



elaboró los referidos documentos tenía perfecto conocimiento del deber que asiste al empleador de poner en conocimiento e instruir a sus dependientes acerca de los riesgos y medidas de prevención. Por otro lado, en el reclamo se señala que los trabajadores tomaban conocimiento de ello por publicación en el diario mural, y a través de la plataforma, lo que es corroborado por los testigos de la reclamante, en el sentido de señalar que aquella era la manera de informar, lo que no resulta procedente, ni aceptable como argumento de descargo, desde que el empleador no puede trasladar a sus trabajadores el deber que la ley le impone de informar y cuidar eficazmente los riesgos.

DECIMO TERCERO: Que, resulta también importante destacar que la reclamante pretende con tres documentos que no fueron siquiera ratificados en juicio, acreditar que entregaba elementos de protección personal, uno de 10 de mayo y otro de 20 de octubre, ambos de 2020, y un tercero sin fecha, debiendo considerarse que, de ser efectivos, no resultan atingentes pues siquiera señalan la cantidad de implementos aportados a cada trabajador, siendo además que su periodicidad debe ser analizada a la luz del dato faltante, y resultando, además, que el documento último siquiera contiene a los trabajadores Zurita y Alderete.

DECIMO CUARTO: Que, a más de todo lo anterior ha de señalarse que la reclamante no ha logrado acreditar los errores que dice la multa contiene, debiendo tenerse especialmente en cuenta que su testigo Matías Carvallo, trabajador de la reclamante en el área de prevención de riesgos con 10 años de antigüedad en la empresa, indicó que la empresa, ante la fiscalización y la multa, tomó medidas reactivas, tal como se desprende del documento toma de conocimiento, en relación a Matriz de riesgos, Procedimiento general Covid-19, Procedimiento actuación Covid -19, Medidas preventivas en pandemia, e Instructivo de limpieza de áreas y artículos de uso diario durante la operación en Salcobrand S.A., todos suscritos por trabajadores de la reclamante en el mes de marzo de 2021, con posterioridad al curso de la multa que se reclama. Lo mismo señaló el testigo Guillermo Fortini, jefe zonal de la reclamante, quien afirmó que tomaron medidas porque debían seguir operando, y reforzando también lo ya razonado acerca de la forma de toma de conocimiento de los



trabajadores, sin que el resto de su declaración permita desvirtuar lo constatado por el fiscalizador del ente administrativo.

DECIMO QUINTO: Que en relación a la rebaja de la multa que se pretende, la reclamante ningún fundamento aportó para su solicitud, más que los ya reseñados, y que conforme a lo razonado no podrán prosperar. Debe considerarse además que, de conformidad a lo establecido en los artículos 208 inciso 1°, 506 y 505 bis del Código del Trabajo, el monto de la multa que se revisa, ha sido aplicado en forma correcta, conforme a los parámetros normativos, y, además, atendida la gravedad y conforme a las facultades legales del ente fiscalizador.

DECIMO SEXTO: Que, con todo lo señalado, preciso es concluir que la reclamante no ha logrado desvirtuar los fundamentos de la sanción aplicada y que la multa que se revisa se encuentra correctamente cursada, por lo que el reclamo será rechazado en todas sus partes según se dirá.

DECIMO SEPTIMO: Que, el resto de la prueba incorporada, revisada y no pormenorizada, en nada altera lo decidido.

Y visto además lo dispuesto en los artículos 445 y siguientes y 503, y 505 y siguientes del Código del Trabajo, se declara:

I.- Que **se rechaza** en todas sus partes la reclamación deducida por SALCOBRAND S.A., en contra de la INSPECCIÓN COMUNAL DEL TRABAJO DE SANTIAGO, y en consecuencia se mantiene íntegramente la multa Resolución 8507/20/42, de fecha 30 de diciembre de 2020.

II.- Que al resultar totalmente vencida, se condena en costas a la reclamante, las que se regulan en \$500.000.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.



RIT : I-128-2021

RUC : 21- 4-0329603-9

**Pronunciada por doña ANDREA LEONOR SILVA AHUMADA, Juez Titular
del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.**

En Santiago a diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, se notificó por el estado diario la sentencia precedente.

